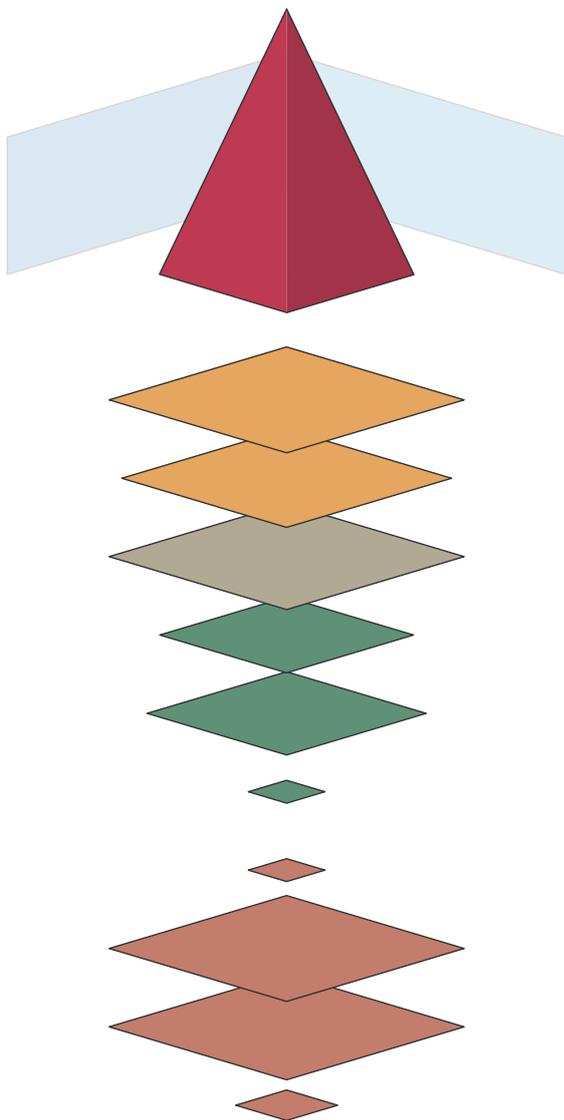



EL SALVADOR




5,94
PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

46.º de 193 países
12.º de 35 países americanos
6.º de 8 países de América Central


MERCADOS CRIMINALES **5,00**

| | |
|---|------|
| TRATA DE PERSONAS | 7,00 |
| TRÁFICO DE PERSONAS | 6,50 |
| TRÁFICO DE ARMAS | 7,00 |
| DELITOS CONTRA LA FLORA | 5,00 |
| DELITOS CONTRA LA FAUNA | 5,50 |
| DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES | 1,50 |
| COMERCIO DE HEROÍNA | 1,50 |
| COMERCIO DE COCAÍNA | 7,00 |
| COMERCIO DE CANNABIS | 7,00 |
| COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS | 2,00 |


ACTORES CRIMINALES **6,88**

| | |
|---------------------------------|------|
| GRUPOS DE TIPO MAFIOSO | 9,50 |
| REDES CRIMINALES | 6,50 |
| ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO | 7,00 |
| ACTORES EXTRANJEROS | 4,50 |


3,71
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

145.º de 193 países
29.º de 35 países americanos
6.º de 8 países de América Central



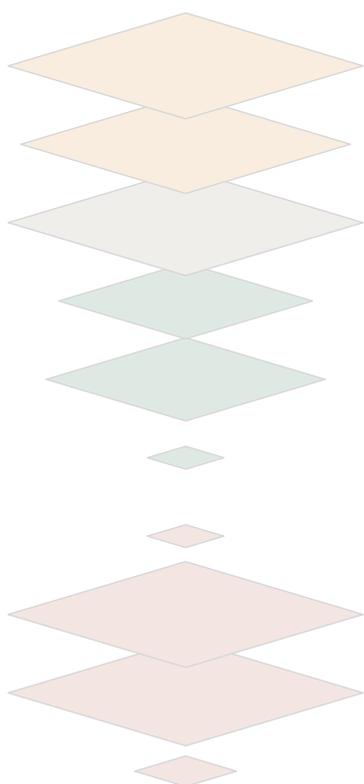
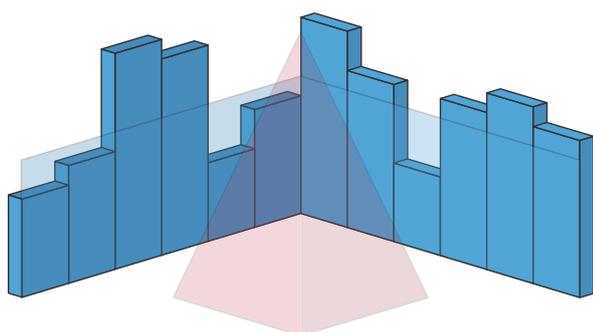
Financiamento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Instituto de Estudios de Seguridad e INTERPOL, en asociación con The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, GI-TOC).



EL SALVADOR



3,71

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

145.º de 193 países

29.º de 35 países americanos

6.º de 8 países de América Central

| | |
|--|------|
| LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA | 2,50 |
| TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 3,00 |
| COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 5,50 |
| POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES | 5,00 |
| SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN | 2,00 |
| CUERPOS DE SEGURIDAD | 3,00 |
| INTEGRIDAD TERRITORIAL | 5,00 |
| LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO | 4,00 |
| CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA | 2,00 |
| APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS | 4,00 |
| PREVENCIÓN | 4,50 |
| ACTORES NO ESTATALES | 4,00 |



5,94

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

46.º de 193 países

12.º de 35 países americanos

6.º de 8 países de América Central



MERCADOS CRIMINALES 5,00



ACTORES CRIMINALES 6,88



CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

La trata de personas es especialmente grave en El Salvador. Si bien se han logrado algunos avances, queda mucho por hacer para abordar la trata de personas nacional e internacional desde El Salvador y sus países vecinos. Las víctimas suelen ser objeto de secuestro y explotación sexual, o se les obliga a perpetrar actos violentos para las bandas callejeras. Las mujeres y niñas obligadas a ejercer la prostitución suelen ser víctimas de violencia de género. A menudo, los traficantes tienen la misma nacionalidad que sus víctimas y, más adelante, algunas víctimas terminan dirigiendo redes de trata de personas. Recientemente, se ha producido un aumento en el uso de plataformas en línea y ofertas de empleo doméstico para atraer a las víctimas, por ejemplo, al matrimonio forzado. Las víctimas de la trata internacional de personas son sometidas a trabajo forzado en Guatemala, México, Belice y Estados Unidos, mientras que las víctimas de trata a nivel nacional se utilizan para el trabajo forzado en la agricultura y las industrias textiles, el servicio doméstico, la mendicidad y el tráfico sexual.

Los niveles masivos de desplazamiento forzado provocados por grupos criminales así como la violencia y la pobreza en El Salvador han dado lugar a redes de tráfico de personas organizadas y altamente rentables. Como resultado, casi una cuarta parte de la población nativa del país vive fuera de sus fronteras. El tráfico de personas en El Salvador generalmente involucra a redes criminales nacionales descentralizadas, que pagan cuotas a grupos transnacionales extranjeros a cambio del paso y se relacionan con actores estatales corruptos para facilitar el contrabando. En el país también existen redes mexicanas y colombianas activas. Las personas traficadas enfrentan una serie de riesgos: muerte, abandono, extorsión, secuestro, trata de personas, violencia sexual, tortura y exposición a los elementos.

TRÁFICO

La mayoría de los homicidios en El Salvador se comete con armas de fuego. Muchos actores criminales poseen armas de fuego ilegales y, considerando la alta tasa de homicidios, es probable que el impacto de las armas de fuego ilegales sea importante. Aunque algunas bandas llevan a cabo actividades violentas, como la extorsión con armas de fuego legalmente disponibles en el mercado nacional e internacional, existen algunos grupos criminales de gran tamaño que también trafican armas. Se trata de un crimen de oportunidad, alimentado por la disponibilidad de armas en la región, los restos de arsenales de conflictos pasados y el constante movimiento de personas y bienes desde y hacia EE. UU., el mayor proveedor de armas compradas legalmente en la región. El mercado está impulsado por la demanda de todo tipo de organizaciones criminales

y por la guerra contra el narcotráfico, así como por la falta de un monopolio estatal de la seguridad en muchas zonas y los altos niveles de violencia e impunidad. También se roban armas de los arsenales del Ejército, como granadas, que se llevan de contrabando a México.

MEDIOAMBIENTE

El Salvador es el único país del mundo donde la minería de metales está completamente prohibida, y la prohibición parece haber sido efectiva. En contraste, los delitos contra la flora y la fauna son problemas de gran magnitud en El Salvador, y los perpetradores actúan predominantemente de manera independiente como redes criminales descentralizadas. No obstante, los delitos contra la vida silvestre a menudo se mezclan con el tráfico de drogas en la región, lo que dificulta la lucha por separado contra estos mercados ilícitos. El Salvador es un país de origen y un mercado de tránsito y destino para las exportaciones ilegales de fauna de los vecinos Guatemala, Honduras y Nicaragua. Cientos de aves se cazan anualmente y, en los últimos años, varias aves en peligro de extinción autóctonas de Nicaragua, como loros y guacamayos, han sido traficadas al mercado central de San Salvador. El impacto del tráfico de fauna sobre la biodiversidad es sustancial, ya que muchas de las especies capturadas y vendidas ilegalmente están en peligro de extinción o casi extintas. Las especies más comúnmente confiscadas son los loros y las iguanas. De los millones de iguanas de los centros de crianza en cautiverio exportadas para el comercio de mascotas, más de la mitad pueden ser silvestres, capturadas en países vecinos. Con respecto a los delitos contra la flora, la tala es un problema importante en El Salvador y es probable que la tala ilegal para leña y materiales de construcción constituya una gran parte de esta actividad. La tala ilegal no parece generar violencia y las autoridades no suelen intervenir.

DROGAS

A diferencia de los países vecinos, El Salvador no es un importante centro de tráfico de cocaína. Sin embargo, el mercado es grande en relación con el tamaño del país y con otras partes del mundo. Actualmente, el consumo doméstico de cocaína o *crack* es escaso, pero su popularidad va en aumento. Las redes criminales están involucradas en el transporte de cocaína y han colaborado con cárteles mexicanos y colombianos. Esto constituye una fuente importante de violencia, principalmente entre bandas que compiten por espacios minoristas y entre distribuidores mayoristas. Algunos actores ilícitos incluso han construido feudos políticos o económicos que podrían desafiar la supremacía estatal y socavar sistemáticamente el Estado de derecho. Anualmente se interceptan toneladas de cocaína, en parte mediante operaciones llevadas a cabo por la Fuerza Naval de El Salvador. Con respecto al cannabis, El Salvador no forma parte de la principal ruta de tráfico regional desde Guatemala

y México hacia Estados Unidos. Sin embargo, las bandas son grandes distribuidores de cannabis y las disputas por el mercado a menudo generan violencia. El aumento de los arrestos y enjuiciamientos por tráfico de bajo nivel está provocando que las cárceles se llenen. En comparación con los mercados de cocaína y cannabis, la presencia y el uso de drogas sintéticas y heroína son insignificantes.

ACTORES CRIMINALES

Los dos grupos de tipo mafioso dominantes y rivales en El Salvador son MS-13 (la apelación común de la Mara Salvatrucha) y Barrio 18, el cual se ha dividido en dos facciones, los Sureños y los Revolucionarios. Las decenas de miles de miembros de estas pandillas suelen ser hombres jóvenes de entornos socioeconómicos bajos, que en la actualidad han renunciado a sus tatuajes distintivos para evitar llamar la atención de las autoridades. Estas bandas mantienen presencia en casi todos los municipios y la extorsión es su principal fuente de ingresos. También cobran alquiler a quienes participan en actividades de robo y reventa, venta de productos falsificados (como cigarrillos), tráfico y contrabando de personas, y en el tráfico nacional de drogas. En algunas áreas, mantienen un control *de facto* sobre la vida diaria de las comunidades. Se sabe que las bandas pagan a los funcionarios corruptos y han recibido dinero del Gobierno a cambio de apoyo político. Tienen un control casi total del sistema penitenciario, utilizando las cárceles como centros administrativos para organizar actividades ilícitas. El acceso significativo a las armas de fuego, como resultado de las leyes de propiedad permisivas, la importación de armas y los arsenales sobrantes de la guerra civil, exacerba la feroz rivalidad entre las pandillas MS-13 y Barrio 18, con violentas guerras territoriales que contribuyen al desplazamiento interno, la migración masiva y una de las mayores tasas de homicidio per cápita en todo el mundo. No obstante, las tasas de asesinato han disminuido, aunque existe un debate sobre si es el resultado de una respuesta gubernamental de línea dura o una aparente tregua entre las pandillas. Recientemente, ambas pandillas han contribuido

a hacer cumplir las restricciones implementadas debido a la COVID-19, desarrollando formas creativas para continuar extorsionando a las empresas.

Los dos grupos principales involucrados en el tráfico de materias primas, el Cártel de Taxis y Los Perrones, se han visto desmantelados y reemplazados por redes criminales descentralizadas, que parecen evitar la violencia y en gran medida logran operar fuera de la vista del público. El Cártel de Taxis estaba conformado por miembros bien establecidos del ámbito político y empresarial salvadoreño que trabajaban con grandes cárteles internacionales de la droga de Colombia y México para facilitar el tránsito de cocaína y otros estupefacientes a través de El Salvador. Los Perrones eran los grupos predominantes del transporte de contrabando – conocidos como «transportistas» – que trabajaban con grupos colombianos, mexicanos y guatemaltecos para traficar drogas y otros productos (por ejemplo, ropa de contrabando) a través de América Central y, finalmente, a lo largo de la frontera oriental de El Salvador. Las redes de «transportistas» (en las que participan empresas de carga, hoteleros, traficantes de personas y vendedores de contrabando) también operan a lo largo de rutas de contrabando que van hacia el norte desde El Salvador, lo que requiere la cooperación con grupos transnacionales de tráfico de personas y contrabando.

Si bien los actores criminales salvadoreños involucrados en el tráfico de drogas, la trata de personas y el tráfico de personas cooperan con grupos transnacionales (como el Cártel de Sinaloa de México), los grupos extranjeros no tienen una presencia significativa dentro de El Salvador. Además, nada sugiere que grupos criminales integrados en el Estado ejerzan control sobre algún mercado criminal. Sin embargo, actores estatales han facilitado actos delictivos, protegido a actores delictivos, obstruido investigaciones penales y vendido armas y municiones a criminales de forma sistemática. Existen indicios de que la Policía ejecuta extrajudicialmente de manera sistemática a los presuntos pandilleros y comparte información sobre cómo encubrir estas acciones y obstruir las investigaciones.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

El Salvador es un país moderadamente estable. Al asumir el cargo en 2019, el presidente Bukele disfrutó de altos niveles de apoyo electoral con su programa anticorrupción y de seguridad. No obstante, existe una falta general de confianza en el liderazgo político, y los esfuerzos del Gobierno para combatir el crimen organizado son en gran medida ineficaces debido en parte a la corrupción de alto nivel y la colusión con grupos criminales. En 2020, se realizaron acusaciones, negadas por el presidente, de que se había establecido un pacto informal

de no agresión entre el Gobierno y las principales pandillas de El Salvador.

En el ámbito internacional, El Salvador ha ratificado todos los tratados y convenciones pertinentes relacionados con el crimen organizado, pero la impunidad y la corrupción de alto nivel obstaculizan la capacidad del país para cumplir con los estándares internacionales. Si bien El Salvador se beneficia de asistencia internacional en la lucha contra el crimen organizado, lo que ha aumentado algunas capacidades

institucionales, desafíos críticos como la violencia de las pandillas, la inseguridad y la corrupción, siguen siendo impedimentos para el establecimiento de instituciones efectivas y confiables.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

No existen unidades específicamente encargadas de combatir el crimen organizado dentro del Poder Judicial, y la corrupción e ineficiencia de las instituciones judiciales y las figuras políticas obstaculizan la implementación de la legislación contra el crimen organizado. Se han tomado medidas para abordar estos problemas y apoyar las investigaciones de delitos perpetrados por políticos, fuerzas de seguridad y afiliados a bandas, incluyendo uno que resultó en el encarcelamiento del expresidente Antonio Saca, acusado de malversación de fondos y lavado de dinero.

El Salvador tiene un alto número de personas en prisión preventiva y a la espera de juicio, lo que demuestra una deficiencia en el procesamiento de los casos judiciales. Los miembros de MS-13 y Barrio18 a veces se encuentran reclusos en las mismas celdas, lo que hace que el sistema penitenciario sea superado en gran medida por las bandas. Los grupos de crimen organizado mantienen un control territorial generalizado y disfrutan de altos niveles de impunidad: la falta de recursos, la poca confianza pública en los cuerpos de seguridad y la violencia perpetrada por actores estatales obstaculizan los avances. Si bien las redadas de las fuerzas especiales han paralizado la capacidad operativa de algunas bandas, también han socavado la recopilación de información vital de inteligencia. El Salvador posee rutas de contrabando terrestres y marítimas de drogas ilícitas, seres humanos, armas y contrabando. Sus fronteras son permeables, una situación que se ve exacerbada por la corrupción y la escasez de recursos e infraestructuras.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

El Salvador está en una situación de riesgo considerable de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El veto de la reforma legislativa, que habría otorgado autonomía al principal organismo de investigación contra el lavado de dinero (Unidad de Investigación de Delitos Financieros), resultó en la suspensión del país del Grupo Egmont, una organización internacional de unidades de inteligencia financiera, y empañó la legitimidad y eficacia del aparato de lucha contra el lavado de dinero del país. El crimen, la inseguridad y los reglamentos «engorrosos» también obstaculizan el crecimiento económico (el país tiene sistemáticamente la tasa de crecimiento más baja de América Central). La incapacidad del Gobierno para proteger a las empresas legítimas de la actividad delictiva, en particular de la extorsión, puede explicar en parte la dependencia generalizada de las prácticas informales.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Se podría hacer más en El Salvador para identificar a las víctimas de formas contemporáneas de esclavitud y contribuir a su salida. Los servicios gubernamentales para identificar y apoyar a las víctimas del crimen organizado a menudo son inadecuados, con servicios particularmente limitados para mujeres, niños y LGBTI víctimas de la trata de personas. Existe una confianza continuada en las organizaciones de la sociedad civil, que desempeñan el papel protagónico en el apoyo a las víctimas y colman las brechas que deja el Estado, a menudo en cooperación con organizaciones internacionales. Las iglesias, en particular, llenan un vacío fundamental a la hora de intentar desmovilizar a los miembros de las bandas. Los medios de comunicación están relativamente libres de injerencia política y son la principal fuente de información independiente sobre el crimen organizado y la corrupción estatal, a pesar del frecuente acoso a la prensa por parte de agentes estatales. La legislación brinda poca protección y los periodistas que intentan investigar la corrupción o las finanzas del Gobierno son amenazados o acosados. Miembros de los medios de comunicación son blanco de la violencia desenfrenada en el país y se han producido varios ataques físicos y asesinatos de periodistas en los últimos años.

Este resumen fue financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos y conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.